

CONTRA: HAROLD ALEXANDER MUÑOZ TAPIA

DELITO: RECEPCIÓN DE VEHICULO MOTORIZADO

RUC: 2400688630-9

RIT: 121-2025

Santiago, quince de julio de dos mil veinticinco.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización del Tribunal e intervinientes. Que, el día diez de de julio del presente año, ante sala del Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, integrada por los jueces doña Virginia Rivera Álvarez, quien presidió la audiencia, doña Pamela Silva Gaete como juez redactora y don Washington Jaña Tapia, como tercer juez integrante, se llevó a efecto audiencia de juicio oral para conocer de acusación deducida por el Ministerio Público en contra de **HAROLD ALEXANDER MUÑOZ TAPIA**, cédula de identidad N° 21.313.167-2, nacido en Santiago el 27 de mayo de 2003, 22 años, sin apodos, soltero, estudiante de cuarto medio y trabajador en empresa de marcos de ventanas, domiciliado en Calle El Observatorio N° 672, comuna de El Bosque.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal don Claudio Parra Riquelme y la defensa del acusado por el defensor penal público don Pablo Felipe Fredes Gormaz ambos con domicilio y forma de notificación registrada en el tribunal.

SEGUNDO: Acusación. Que el Ministerio Público al deducir acusación en contra del acusado, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, la fundó en el siguiente hecho:

“El día 15 de junio del año 2024, aproximadamente a las 20:40 horas, en calle El Pallador con intersección calle Las Tórtolas, en la comuna de El Bosque, funcionarios de carabineros sorprendieron a los acusados **HAROLD ALEXANDER MUÑOZ TAPIA** y **AXEL FELIPE SANHUEZA TORRES**, a bordo del vehículo marca Changan, placa patente única LRHS.57, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo con violencia de fecha 10 de junio del año 2024, por lo que los acusados conocían o no podían menos que conocer el origen ilícito del vehículo que mantenían en su poder, momento en el cual son fiscalizados y en la revisión de los acusados se les encontró las siguientes especies, en poder de **HAROLD ALEXANDER MUÑOZ TAPIA**, quien se encontraba en el asiento del conductor del vehículo se encontró en el cinto de su cinturón un cuchillo de 11,5 centímetros de empuñadura y 7 centímetros de hoja aproximadamente y respecto del acusado **AXEL FELIPE SANHUEZA TORRES**, quien se encontraba en el asiento del copiloto se le encontró un cuchillo de 13 centímetros de empuñadura y 16 centímetros de hoja que mantenía entre sus vestimentas” (sic).

El persecutor entiende que tal hecho configura el delito **consumado** de **receptación de vehículo motorizado, previsto** y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal y en el que ha cabido participación punible al encartado en calidad de autor en los términos descritos en el artículo 15 N°1 del citado texto legal, sin que concurran circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar.

Requiere la Fiscalía que se imponga al acusado la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa del valor del avalúo fiscal del móvil receptado, esto es, es la suma de \$5.602.280 más accesorias legales y costas de la causa.

En este orden de cosas, en su alegato de apertura el representante del Ministerio Público relató que los hechos que motivan el juicio se remontan al 15 de junio de 2024, cuando la víctima (propietario del vehículo) y su pareja fueron abordadas mediante la modalidad de *encerrona* por cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo rojo. Durante el asalto, las víctimas resultaron con lesiones en el rostro, frente y cejas, y el vehículo en el que se desplazaban fue sustraído con violencia. Cinco días después, personal de Carabineros fue alertado sobre la presencia de un vehículo posiblemente robado en una intersección de la comuna de El Bosque. Al llegar al lugar, encontraron al acusado sentado en el asiento del conductor, acompañado de un segundo sujeto en el asiento del copiloto. El automóvil tenía sus luces encendidas, las placas patentes cubiertas con barro -lo que impedía su correcta visualización-, y ambos sujetos portaban armas blancas. Estos elementos serán analizados durante el juicio y permitirán acreditar que el acusado tenía conocimiento del origen ilícito del vehículo.

Anuncia que la controversia principal girará en torno al elemento subjetivo del tipo penal, el cual será debidamente probado mediante prueba testimonial, evidencia fotográfica, material incautado y otros medios de prueba. Con todo ello, el Ministerio Público solicitará al término del juicio un veredicto condenatorio.

TERCERO: Alegato de inicio. Que la defensa del acusado Muñoz Tapia sostiene que la prueba que será rendida por el Ministerio Público no permitirá acreditar los elementos del tipo penal que se imputa a su representado, ni en su dimensión objetiva ni subjetiva, como tampoco la antijuridicidad de la conducta. Se enfatiza que el bien jurídico protegido por la norma es la propiedad, en vinculación con el delito base, cuestión que será desarrollada en profundidad durante los alegatos de clausura, conforme al mérito de la prueba que se produzca en juicio.

En virtud de lo anterior, la defensa confía en que el tribunal deberá arribar a un veredicto absolutorio. Asimismo, se informa que el acusado ejercerá su derecho a declarar, renunciando expresamente a guardar silencio.

CUARTO: Declaración del acusado. Que Harold Alexander Muñoz Tapia, en presencia de su abogado defensor y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código Procesal Penal, fue consultado por la juez presidente de sala si haría uso de su derecho a prestar declaración o guardaría silencio, optando por declarar.

El acusado señala que el día 15 de junio de 2024 iba saliendo de la casa de su prima, ubicada en el sector de El Payador con Los Mimbres, aunque no recuerda la dirección exacta. Señala: *“iba andando en silla de ruedas, me habían pegado un impacto de bala. Las dos piernas tenían tutores*

externos. *Andaba en silla de ruedas y en eso yo voy a comprarme un pito de marihuana... por el Payador con las Tórtolas*” (sic). Luego de comprar el cigarrillo, se dirigió a su domicilio ubicado en la intersección de Observatorio con Los Morros.

Al llegar a su casa, relata que su tío -a quien también identifica como primo, de nombre Axel Sanhuesa, de aproximadamente 26 años- le propone ir a fumar a la plaza. Señala: *“voy para mi casa y sale mi tío y me dice vamos a fumar en el piso de la plaza y yo con él fuimos para la plaza y entonces estábamos fumando en un piso de la plaza y mi tío se pone a intrusear y abre el auto, pero el auto estaba abierto”* (sic).

El acusado indica que no sabía cuántos días llevaba ese vehículo estacionado en ese lugar. Refiere que su tío lo tomó en brazos y lo subió al vehículo por el lado del conductor, debido a que él no podía moverse por sí solo, ya que *“andaba con tutores en las dos piernas”*. Su tío se subió por el otro lado, en el asiento del copiloto. Afirma que no iban circulando en el vehículo, que no tenían ningún objeto perteneciente al automóvil, y que simplemente estaban sentados dentro de él cuando llegaron dos patrullas de Carabineros.

Precisa: *“yo no sabía que era robado, estaba en la esquina de mi casa, atrás de donde estaba, había un caballero que vende repuestos de autos, yo pensé que no sé, que lo tenía ahí porque estaba malo, no sé más de ese vehículo”* (sic):

A preguntas del fiscal, reitera que tras comprar el cigarrillo de marihuana fue a su casa, y luego a la plaza con su tío a fumar. Indica nuevamente: *“mi tío me dijo, vamos a fumar el pito a la plaza. Con él fui a fumarle el pito a la plaza. Donde estaba ese vehículo”* (sic). Explica que el vehículo se encontraba estacionado a un costado de la plaza, en el sector de El Payador, junto a una camioneta con parachoques y cerca de un lugar donde un hombre tiene una desarmadura.

Precisa que estaban sentados en un área con una base de cemento, y que desde allí vio el vehículo, el cual ya había notado anteriormente, ya que vive por el sector. Reconoce que ingresó al auto en compañía de su tío, quien lo ayudó a subir al asiento del conductor debido a su limitación física. Señala que tiene *“dos balazos, uno en cada pierna”* y que eso le provocó fracturas en tibia y peroné de ambas extremidades. Su tío se ubicó a su lado *“al lado mío”* (sic), en el asiento del copiloto.

Recuerda que el vehículo era de color rojo y estaba lleno de polvo. Describe que la consola del automóvil estaba en buen estado, y añade: *“yo empecé a meterle mano a una cuestión que se giraba acá al lado. Y ahí se prendieron las luces”* (sic). Cree que las luces delanteras se encendieron.

Manifiesta que el habitáculo del vehículo estaba completo, sin faltantes, y que no observó vidrios rotos. Informa que ingresó al automóvil porque hacía frío y le dolían las piernas, lo cual ocurrió entre las ocho y nueve de la noche. Reitera: *“me dolían las piernas porque yo tenía la tibia y el peroné quebrado porque en el Barros Luco me dieron el alta, me mandaron con los tutores externos y sin medicamentos, sin nada”* (sic).

Respecto al momento de la detención, indica que él y su tío estaban dentro del vehículo fumando cuando llegaron los carabineros. Relata que los funcionarios abrieron la puerta del automóvil y le informaron que el vehículo era robado. Añade: *“yo no tenía ni idea, me pescan, me tiran al suelo con mis tutores. Incluso se me doblaron dos tutores de mi pierna cuando me tiraron al suelo. Yo les decía que tenía mis pies quebrados, ellos no me creían. Yo les dije que tenía mis pies*

quebrados, se lo volví a repetir, incluso me tuve que subir el pantalón para mostrarle los tutores que tenía. Me dicen, ¿y cómo te subiste al auto? Les dije, me subió mi tío” (sic).

Aclara que su tío no se dio a la fuga, a pesar de haber visto a los carabineros aproximarse, y que decidió quedarse con él en el lugar. Añade que compró un solo cigarro de marihuana, que ya había sido consumido al momento de ingresar al vehículo: “*ya lo habíamos fumado*”. Aclara también que no llevaba consigo ningún otro objeto.

La defensa no realiza preguntas.

QUINTO: Que los intervinientes no arribaron a ninguna convención probatoria que considerar.

SEXTO: Medios de prueba. Que, para los efectos de acreditar su teoría del caso, con relación a los hechos y circunstancias objeto de la acusación el Ministerio Público rindió como prueba de cargo, testimonial, documental y fotografías. La defensa, no hizo suya la prueba de cargo y no presentó prueba propia. En su oportunidad tanto el fiscal como abogado defensor, hicieron uso de su facultad de contra interrogar a los testigos aportados y de examinar los documentos incorporados.

PRUEBA DE LA FISCALÍA

A.- Prueba testimonial:

1.- Daniel Augusto Loyola Monrroy, cédula de identidad N° 19.105.131-9, cabo segundo de Carabineros de dotación de la 62 comisaría de San Bernardo.

2.- Leonardo Antonio Vega Inostroza, cédula de identidad N° 20.168.104-9, subteniente de carabineros de dotación de la sección de investigación criminal de la 39° comisaría de El Bosque.

3.- Claudio Andrés Bustos Aravena, cédula de identidad N° 18.343.948-0, cabo primero de dotación de la escuela de suboficiales de Santiago.

B.- Prueba documental

1.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículo Motorizado del vehículo placa patente LRHS.57.

2.- Copia Acta de encargo de vehículo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, código EUN 605959, fecha del encargo 10 de junio de 2024, especie encargada vehículo motorizado marca Changan, color rojo, modelo CS15 1.5, PPU LRHS57

3.- Copia tasación fiscal de vehículo, emanado del Servicio de impuestos Internos.

C.- Otros Medios de Prueba:

1.- Dos fotografías del vehículo receptado placa patente LRHS.57, elaborado por Carabineros de Chile.

2.- Cuatro fotografías representativas de dos cuchillos que fueron incautados y encontrados en poder de los causados el día de los hechos, elaborados por Carabineros de Chile.

D. Prueba material:

1.- 01 Cuchillo tipo cocinero mango color negro NUE 7175329.

2.- 01 Cuchillo tipo cocinero NUE 7175330.

SÉPTIMO: Alegatos. Que llegada la etapa de sostener las *consideraciones de clausura y replicas*, los intervinientes manifestaron lo siguiente:

El representante del Ministerio Público señaló en su alegato de clausura que, en relación con la teoría del caso planteada por la defensa -la cual sostiene que no concurren los elementos del tipo penal-, estima procedente efectuar las siguientes consideraciones:

Que el tipo penal previsto en el artículo 456 bis A del Código Penal, en su inciso tercero, sanciona específicamente la receptación de vehículos motorizados. Esta norma fue incorporada con el objeto de establecer penas altas, fijando tanto límites en cuanto a la sanción privativa de libertad como respecto de la multa aplicable.

Así, uno de los elementos objetivos exigidos por el tipo penal es la existencia de una especie de origen ilícito. En el presente caso, no cabe duda de que tal elemento concurre, tratándose de un vehículo marca Changán, color rojo, cuya placa patente -LRHS 57- fue individualizada durante el juicio. La procedencia ilícita de dicho vehículo fue acreditada mediante prueba testimonial rendida por funcionarios policiales, así como a través de medios materiales, entre ellos la fijación fotográfica. Se estableció que dicho vehículo fue sustraído en el marco de un robo con violencia ocurrido el día 10 de junio de 2024 en la comuna de San Bernardo.

Otro de los elementos objetivos del tipo penal consiste en mantener en su poder dicha especie. Sobre este punto, la prueba rendida permite afirmar sin lugar a duda que el acusado mantenía el vehículo en su poder. Esto se desprende de que fue sorprendido al interior del automóvil, en compañía de un coimputado, ocupando específicamente el asiento del conductor, lo que revela una posición de dominio respecto del móvil. Asimismo, se constató que en el maletero del automóvil se encontraba una silla de ruedas de propiedad del acusado, elemento que él mismo reconoció en su declaración. Tal circunstancia permite inferir que el vehículo se hallaba efectivamente bajo su disposición, siendo utilizado para el traslado de sus pertenencias.

Se observó, además, que el vehículo mantenía encendidas las luces de sus faros delanteros y traseros, lo cual requiere necesariamente que el vehículo se encuentre con contacto activado, reforzando así la idea del dominio efectivo sobre el mismo por parte del imputado Harold Muñoz.

A ello se suma que tanto el acusado como su acompañante portaban armas blancas al momento de ser sorprendidos por personal policial. Igualmente, se constató que las placas patentes del vehículo estaban intencionalmente cubiertas con barro, impidiendo su correcta visualización. Esta circunstancia fue debidamente consignada por los funcionarios aprehensores, quienes indicaron que estas maniobras suelen utilizarse con la finalidad de evitar la identificación de vehículos robados, al impedir su control o fiscalización.

De este conjunto de antecedentes se puede inferir, con arreglo a un razonamiento lógico-jurídico, que el acusado mantenía en su poder una especie de origen ilícito y que tenía pleno conocimiento de su procedencia ilegal. Esta última inferencia se ve reforzada por el hecho de haber intentado ocultar las placas patentes, acción que no tendría sentido alguno si desconociera la ilicitud del vehículo.

En relación con la versión entregada por el acusado, si bien sostiene que ingresó al vehículo en compañía de un familiar por razones climáticas -afirmando que se encontraba en una plaza y que no portaban especie alguna-, tal declaración pierde fuerza y credibilidad frente a los antecedentes

probatorios. Ello, en tanto se acreditó que ambos portaban armas blancas, lo que desmiente una parte sustancial de su relato.

En consecuencia, y considerando la prueba testimonial, material y documental rendida en juicio, el Ministerio Público sostiene que se encuentran plenamente acreditados los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 456 bis A del Código Penal, configurándose los hechos en los términos contenidos en la acusación.

La defensa sostiene en su alegato de clausura que, con la prueba rendida en juicio, no se ha acreditado la comisión del delito de receptación de vehículo motorizado imputado a su representado. Desde esta perspectiva, estima que no concurren los elementos constitutivos del tipo penal, ni en su dimensión objetiva, ni subjetiva, ni tampoco en cuanto a la antijuridicidad de la conducta.

En relación con la tipicidad objetiva, señala que, el verbo rector imputado es “tener en su poder” una especie de origen ilícito. Sin embargo, la ley no define expresamente qué debe entenderse por tal expresión. En doctrina, particularmente Matus y Ramírez, se ha sostenido que, a partir de la última reforma de este tipo penal, debe entenderse como una forma de delito de emprendimiento con objeto ilícito, es decir, una actividad con ánimo de lucro más o menos permanente en el tiempo. La jurisprudencia nacional ha acogido esta interpretación, entendiendo que se requiere un tiempo mínimo de posesión que permita inferir un aprovechamiento posterior de la especie.

A juicio de esta defensa, tal exigencia no se cumple en el presente caso. Conforme a lo declarado por los funcionarios policiales, la orden de verificar la presencia del vehículo fue recibida minutos antes del procedimiento, sin que se les informara que había personas en su interior. Desde el lugar en que se encontraban hasta el sitio del suceso hay una distancia aproximada de dos kilómetros, lo que permite estimar un tiempo de respuesta cercano a 10 o 15 minutos, y no los 40 que señaló uno de los testigos. Esta brevedad temporal otorga verosimilitud al relato del acusado, quien indicó haber subido al vehículo de forma circunstancial, en compañía de un familiar, con la intención de fumar un cigarrillo de marihuana.

Tal contacto breve y ocasional con el vehículo no satisface la exigencia de una tenencia idónea para generar un aprovechamiento, como exige la doctrina y la jurisprudencia. Por tanto, no se configura el verbo rector “tener en su poder” exigido por el tipo penal.

En relación con la disposición del vehículo, el fiscal ha sostenido que el imputado tenía dominio sobre el móvil por encontrarse sentado en el asiento del conductor y por hallarse en el maletero una silla de ruedas de su propiedad, lo que la defensa rebate. Primero, la silla de ruedas no necesariamente denota disposición sobre el vehículo, para la defensa no es verosímil que haya sido introducida al automóvil simplemente por el hecho que el acusado haya ingresado al vehículo para protegerse del frío, máxime considerando que se trata de un vehículo tipo station wagon, en que el maletero se encuentra conectado al espacio de pasajeros. Segundo, el imputado reconoció haber encendido las luces del vehículo, pero el Ministerio Público no incorporó al juicio prueba técnica que explique cómo se activan las luminarias de ese modelo en particular (Changán CS15). A juicio de esta defensa, es un hecho público y notorio que dicho vehículo cuenta con un mando lateral para el encendido de luces, sin necesidad de utilizar llaves. De hecho, en el registro de vestimentas realizado

por los funcionarios policiales, no se encontró ninguna llave en poder del imputado. Esto permite sostener, al menos, una duda razonable respecto de si el vehículo estaba abierto y el acceso fue fortuito.

En consecuencia, la defensa sostiene que no se ha acreditado el tipo objetivo, ya que el contacto físico con la especie no fue suficientemente intenso ni permanente en el tiempo. Ello se refuerza si se considera que las conductas equiparables a “tener en su poder” -como vender o transformar- aluden a actos orientados a la reducción de especies de origen ilícito, lo cual está ausente en el caso concreto.

En cuanto al tipo subjetivo, esto es, el conocimiento del origen ilícito del vehículo, la defensa advierte un serio problema de congruencia en la acusación. Esta se limita a afirmar que el imputado se encontraba a bordo del vehículo, el cual tenía encargo por robo, y concluye que “no podía menos que conocer” su procedencia ilícita. Sin embargo, no se describen los presupuestos fácticos que permitan fundar dicha inferencia.

Añade que la jurisprudencia ha sido clara al respecto: el conocimiento de un elemento normativo como el dolo debe construirse sobre hechos específicos, suficientemente detallados en la acusación, para permitir a la defensa su contradicción y al tribunal, el respeto de los límites del juicio. Esta omisión vulnera el principio de congruencia. La defensa cita, en apoyo de esta tesis, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 1970-2015.

Además, los elementos invocados por la fiscalía no permiten inferir el conocimiento exigido por el tipo penal. Se ha sostenido que las placas patentes estaban cubiertas con barro; sin embargo, los hechos ocurrieron en junio de 2024, pleno invierno, lo que hace perfectamente posible que el vehículo presentara suciedad propia de las condiciones climáticas. Las fotografías incorporadas al juicio muestran un automóvil sucio en general, incluyendo los parabrisas y zonas no alcanzadas por los limpiadores, sin evidencia concluyente de una acción deliberada para ocultar las placas.

Tampoco se acreditaron signos de fuerza o alteraciones en el vehículo que permitieran al imputado sospechar de su origen ilícito. No se desvirtuó, además, que el vehículo se encontraba en la vía pública, en una plaza, ni que existía en las cercanías una desarmaduría, contexto que favorece la tesis de una relación accidental con el móvil.

Por último, incluso si el tribunal estimara que la conducta es típica, la defensa sostiene que no concurre la antijuridicidad material. El delito de receptación busca evitar la consolidación o agravamiento del daño patrimonial causado por el delito base (hurto o robo). En este caso, el acusado no ejerció disposición efectiva sobre el bien ni incrementó el perjuicio. No lo condujo, no lo ocultó, ni intentó venderlo. Se encontraba en el interior del vehículo de manera transitoria y en una plaza pública, sin ejercer control efectivo sobre él.

Resulta especialmente relevante que el acusado utiliza silla de ruedas, producto de heridas por impactos balísticos. Esta condición física limita su capacidad de operar el vehículo, lo que debilita aún más la hipótesis de disposición material sobre el móvil. Si la intención hubiese sido iniciar un desplazamiento, lo razonable sería que el coimputado -quien no presenta impedimentos físicos- hubiese ocupado el asiento del conductor. Sin embargo, no fue así.

En definitiva, la defensa concluye que no se han acreditado los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal, ni tampoco la antijuridicidad material de la conducta. Subsidiariamente, si se estimara configurado alguno de dichos elementos, persiste un grave problema de congruencia que impide válidamente dictar una sentencia condenatoria, pide se absuelva a su representado de los cargos formulados en su contra.

El fiscal, en uso de su derecho a réplica, se hizo cargo de los principales argumentos sostenidos por la defensa. En primer lugar, señala que la defensa ha planteado que la relación del acusado con el vehículo motorizado tendría un carácter meramente circunstancial, ocasional y temporal. No obstante, esta tesis se ve contradicha por un elemento objetivo y concreto: la presencia de una silla de ruedas de propiedad del imputado al interior del vehículo. Estimar, como sostiene la defensa, que el ingreso al automóvil fue transitorio, sin ánimo de dominio ni posesión, entonces no se justifica el traslado de dicho objeto personal al interior del vehículo. Una relación verdaderamente momentánea no requeriría introducir pertenencias personales al móvil, pudiendo la silla de ruedas haber quedado al costado del automóvil. Este hecho demuestra a juicio de la fiscalía, un grado de apropiación y disposición incompatible con una interacción accidental.

En segundo término, respecto de la alegación relativa a la incapacidad física del acusado para conducir el vehículo -debido a que se moviliza en silla de ruedas-, la fiscalía considera que este punto no ha sido debidamente demostrado, más aún, si el imputado efectivamente hubiese estado imposibilitado físicamente de manejar, lo lógico y esperable habría sido que se ubicara en el asiento del copiloto. Sin embargo, fue sorprendido ocupando el asiento del conductor, con el volante frente a él, lo cual requiere mayor esfuerzo para el ingreso al habitáculo, especialmente considerando su condición. Ello permite inferir que su discapacidad no tenía la magnitud que la defensa pretende sostener, y que su ubicación responde más bien a una intención de ejercer control o dominio sobre el vehículo.

En cuanto a la alegación de incongruencia entre la acusación y la prueba rendida, el Ministerio Público rechaza tal argumento. La congruencia procesal exige que los hechos expuestos en la acusación coincidan con aquellos ventilados en juicio oral. Y en este caso, no se ha alegado ni demostrado la existencia de hechos, fechas, lugares, vehículos o partícipes distintos de los contenidos en el libelo acusatorio. Toda la prueba ha versado sobre los mismos elementos fácticos formalizados, lo que satisface plenamente el principio de congruencia.

Respecto de la alegación vinculada a la presencia de barro en las placas patentes del vehículo, la fiscalía destaca que este elemento es altamente relevante. No se trata de una mancha azarosa o producto de las condiciones climáticas. El barro se encontraba estratégicamente dispuesto sobre el número “57” de la placa patente, impidiendo su lectura. Tal disposición no es accidental, sino claramente intencional, pues afecta exactamente los caracteres identificatorios del vehículo. Si se hubiese tratado de una acumulación natural de barro, su distribución habría sido aleatoria o disímil en ambas placas. En cambio, aquí se acreditó una colocación precisa, orientada a impedir la identificación del móvil.

En definitiva, el Ministerio Público reafirma que los hechos y circunstancias acreditadas en juicio permiten concluir la concurrencia de los elementos típicos y subjetivos del delito de receptación

de vehículo motorizado, sin que los argumentos de la defensa logren desvirtuar la acusación ni introducir duda razonable que justifique una absolución.

OCTAVO: Hecho establecido y calificación jurídica. Que, centrada en términos generales la controversia, y efectuando estos sentenciadores el examen de los presupuestos exigidos por el legislador para tener por cierto los hechos materia de la acusación, y la intervención culpable del acusado en el ilícito imputado, tal como se adelantó al dar a conocer en el veredicto, este Tribunal consideró que el órgano persecutor, con las piezas de convicción enunciadas en el considerando sexto, pudo acreditar, siguiendo la normativa dentro de los estándares exigidos por el legislador, no sólo los hechos acusados, sino también la autoría con la cual actuó el imputado en la comisión del ilícito por el cual se le condena, conclusión a la cual se arribó tras el análisis riguroso, concatenado y sistematizado de todos los elementos de prueba que se referirán y valorarán en los razonamientos siguientes.

Así las cosas, apreciadas las probanzas rendidas libremente según lo preceptuado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que no contradicen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, este Tribunal ha adquirido, más allá de toda duda razonable, la convicción de que se encuentran acreditados los siguientes hechos:

Con fecha 15 de junio del año 2024, aproximadamente a las 20:40 horas, en la intersección de calle El Payador con calle Las Tórtolas, comuna de El Bosque, funcionarios de Carabineros sorprendieron a Harold Alexander Muñoz Tapia, junto a un segundo sujeto, a bordo de un vehículo marca Changan, placa patente única LRHS 57, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo con violencia de fecha 10 de junio de 2024.

Muñoz Tapia se encontraba ubicado en el asiento del conductor, manteniendo en su poder el vehículo anteriormente sustraído, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito. Al momento de la fiscalización y registro personal, se le encontró un cuchillo con empuñadura de aproximadamente 11,5 centímetros y una hoja de 7 centímetros, sujeto al cinto de su pantalón. Asimismo, al segundo ocupante, ubicado en el asiento del copiloto, se le incautó un cuchillo de aproximadamente 13 centímetros de empuñadura y 16 centímetros de hoja, el cual mantenía entre sus vestimentas.

En ese orden de ideas, **el Tribunal estimó que el hecho anteriormente descrito, constituye un delito de receptación de vehículo motorizado previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, cuyo grado de desarrollo corresponde al de consumado.** En efecto, la prueba de cargo permitió claramente tener por cierta la concurrencia de los presupuestos jurídicos que sustentan tanto la faz objetiva como subjetiva del ilícito in examine, permitiendo con ello superar cualquier duda razonable que pudiese entorpecer su configuración.

NOVENO: Valoración de la Prueba. Que para arribar a la convicción reseñada en el motivo que precede, es necesario develar la concurrencia fáctica de cada uno de los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la figura penal establecida ut supra y su vinculación con los diversos elementos de cargo allegados al juicio.

1.- En cuanto a la fase objetiva:

El delito de receptación requiere, como elemento fundamental, la demostración al menos genérica de la existencia previa de un delito base, ya sea de hurto o robo, recaído sobre el bien incriminado. En este caso, el delito base se configura por la comisión de un robo con violencia que afectó al propietario del vehículo motorizado, marca Changan, modelo CS15 1.5, color rojo, año 2020, con placa patente LRHS57.

Este hecho fue confirmado de manera consistente no sólo por los funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento que culminó con la detención del imputado, **subteniente Leonardo Antonio Vega Inostroza y cabo primero Claudio Andrés Bustos Aravena**, sino que también por aquel funcionario que prestó colaboración el día 10 de junio de 2024 en el procedimiento que se originó debido a la sustracción del vehículo, a saber, **el cabo segundo Daniel Augusto Loyola Monrroy**.

En particular, el cabo Loyola Monrroy relató que, el día 10 de junio de 2024, alrededor de las 02:00 horas, recibió un llamado del cuerpo de guardia de la 62ª Comisaría para colaborar en un procedimiento. En el Hospital El Pino, donde se encontraba de servicio, se entrevistó con las víctimas del hecho, identificadas por sus iniciales como L.C. y J.C. y quienes presentaban lesiones leves en la cabeza y ceja, constatadas por personal médico.

Añadió el cabo segundo Daniel Loyola Monrroy que, según el relato entregado por las víctimas, aproximadamente a las 00:40 horas, mientras se encontraban a bordo de un vehículo marca Changán, modelo CS, color rojo, patente LRHS57, estacionados en la intersección de calle Nieto de Gaete con Domeyko, comuna de San Bernardo, fueron abordados por cuatro sujetos que descendieron de un vehículo Kia Río 5 color rojo. Dos de los atacantes los agredieron con la empuñadura de un arma de fuego, exigiéndoles bajar con amenazas de muerte y la entrega del celular, mientras los otros dos abordaron el automóvil Changán y lo encendieron, pese a que la chapa estaba en mal estado, dándose a la fuga en el vehículo sustraído.

Tras recabar la información, el funcionario realizó una difusión radial inmediata a través de CENCO para la recuperación del vehículo, y gestionó el encargo nacional del automóvil mediante el número EUN 60 59 59 en la plataforma institucional de Carabineros. El avalúo del vehículo, según informó la víctima, ascendía a \$7.000.000.

Lo anterior se encuentra plenamente respaldado por la prueba documental incorporada, consistente en la copia del acta de encargo de vehículo emitida por la Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo el código EUN 605959, con fecha 10 de junio de 2024, en la cual se registra que la especie encargada corresponde a un vehículo motorizado marca Changan, modelo CS15 1.5, color rojo, placa patente única LRHS57. Dicha información concuerda con lo declarado por el cabo Daniel Loyola Monrroy, quien, tras entrevistarse con las víctimas del robo con violencia ocurrido esa misma madrugada, gestionó de manera inmediata la difusión radial a través de CENCO y formalizó el encargo a nivel nacional del vehículo sustraído.

Asimismo, el certificado de inscripciones y anotaciones vigentes del Registro Civil da cuenta de que el vehículo placa patente LRHS57 se encuentra inscrito a nombre de una persona identificada con las iniciales L.R.C.R., (descrito como L.C. por el funcionario policial) y consigna expresamente el encargo único nacional N° 605959, informado por Carabineros de Chile en la misma fecha del

hecho, reforzando así la existencia del delito base que da origen al ilícito de receptación investigado en autos.

La existencia del delito base de robo con violencia, acreditada por la declaración del funcionario Daniel Loyola Monrroy y la documentación oficial del encargo policial, se ve complementada por el hallazgo del vehículo sustraído el que era mantenido material y directamente por el acusado Harold Alexander Muñoz Tapia **conforme a lo declarado por los funcionarios de Carabineros subteniente Leonardo Vega Inostroza y cabo primero Claudio Bustos Aravena**, quienes participaron directamente en el procedimiento de detención el día 15 de junio de 2024, alrededor de las 20:40 horas. Ambos testigos coincidieron en que, tras recibir el procedimiento verbalmente desde el primer turno -quienes no lograron concurrir por encontrarse en otro procedimiento-, se dirigieron a la intersección de calles El Payador con Las Tórtolas, comuna de El Bosque, donde ubicaron un vehículo marca Changan, modelo CS15, color rojo, placa patente única LRHS57, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo con violencia de fecha 10 de junio de 2024.

Explicaron que, al arribar al lugar, observaron que el vehículo se encontraba estacionado con sus luces delanteras y traseras encendidas, lo que indicaba que se encontraba con contacto activado, lo cual, según explicó el subteniente Vega, requería necesariamente del uso de la llave, dado que ese modelo no cuenta con encendido por botón. Esta circunstancia permite evidenciar un grado de dominio funcional y disposición sobre el vehículo por parte del acusado considerando, por cierto, que la llave del contacto del automóvil no fue recuperada dentro del procedimiento, lo que implica necesariamente la utilización de otro medio para su activación.

Además, ambos funcionarios constataron en el lugar que el vehículo en el que se encontraba el acusado Harold Muñoz Tapia correspondía efectivamente al automóvil sustraído mediante robo con violencia, al verificar la placa patente única LRHS57. Indicaron que, al llegar al sitio del suceso, en un primer momento, advirtieron que los dos últimos dígitos numéricos de la patente delantera se encontraban cubiertos con barro, impidiendo su completa visualización. Al limpiar dicha superficie - en la placa delantera-, procedieron a realizar la consulta a la central de comunicaciones CENCO, logrando corroborar que el vehículo mantenía encargo vigente por robo con violencia de fecha 10 de junio de 2024, información que coincidía plenamente con las características físicas del automóvil, previamente informadas. Esta diligencia permitió confirmar en el acto la condición de especie ilícita del vehículo y motivó la detención de sus ocupantes.

Ambos declarantes señalaron que tal forma de ocultamiento no respondía a causas naturales, sino que era coherente con prácticas comúnmente utilizadas para impedir la identificación de vehículos robados y así eludir el control policial, dando cuenta que la patente trasera se encontraba en las mismas condiciones.

Respecto de los ocupantes, los funcionarios indicaron que observaron desde el exterior que en el interior del automóvil se encontraban dos personas: una en el asiento del conductor -Harold Muñoz Tapia- y otra en el del copiloto -Axel Sanhueza Torres, y a fin de evitar una eventual fuga, fue que los funcionarios cruzaron el vehículo policial por la parte delantera del automóvil sospechoso y procedieron a su fiscalización.

De igual manera, ambos funcionarios señalaron que, durante la revisión corporal superficial, al acusado Muñoz Tapia, ubicado en el asiento del conductor, se le encontró en el cinto, lado derecho, un arma blanca tipo cuchillo marca Kanji, con empuñadura de 11,5 cm y hoja de 7,5 cm, mientras que al copiloto también se le incautó un arma blanca de mayor tamaño. Asimismo, al solicitar los documentos de identificación, ninguno de los dos sujetos portaba licencia de conducir ni documentación del vehículo, lo cual refuerza la ilegalidad de la tenencia.

Adicionalmente, al revisar la parte posterior del vehículo -el maletero- los funcionarios encontraron en el maletero una silla de ruedas, elemento que el propio imputado reconoció como de su propiedad, afirmando que se movilizaba en ella debido a lesiones por impactos balísticos anteriores en ambas piernas. Esta circunstancia, cabe señalar, que lejos de desvincular al acusado con la posesión o mera tenencia del vehículo, confirma que mantenía enseres personales dentro del mismo, lo cual resulta incompatible con una presencia meramente circunstancial o pasajera del acusado en el interior. Asimismo, ambos funcionarios policiales señalaron que el vehículo se encontraba en buen estado general, sin daños visibles ni signos de forzamiento en chapas, cerraduras o ventanillas, lo que permite descartar que se tratara de un vehículo abandonado, por el contrario, estas condiciones, sumadas a su activación de las luces y la presencia de pertenencias personales en su interior, refuerzan la hipótesis de una posesión consciente por parte del acusado.

También, conforme a la declaración del cabo segundo Daniel Loyola Monrroy, quien reprodujo el relato de las víctimas del robo, se acreditó que el vehículo fue sustraído mediante violencia ejercida directamente sobre las personas, quienes resultaron con lesiones producto de golpes propinados con la empuñadura de un arma de fuego, sin que fuera necesario forzar la chapa ni romper ventanillas. Estas circunstancias explican una vez más el buen estado en que fue hallado el vehículo y confirman su origen ilícito, sin que ello implique atribuir al acusado participación en el delito base, pero sí conocimiento o al menos la posibilidad cierta de conocer la procedencia delictual de la especie que mantenía en su poder.

En consecuencia, conforme a los antecedentes expuestos por los funcionarios actuantes, se concluye que Harold Muñoz Tapia fue sorprendido en una posición de control directo, físico y exclusivo sobre el vehículo encargado por robo con violencia, en un contexto que permite inferir razonablemente su conocimiento del origen ilícito de la especie, tanto por la forma en que el móvil era ocultado (con barro en las patentes), como por su activación con contacto y la presencia de armas blancas, lo que en su conjunto permite tener por configurado el delito de receptación contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal.

Asimismo, se encuentra plenamente acreditado que la especie objeto del delito corresponde a un vehículo motorizado operativo y funcional, sin presentar deterioros relevantes en su estructura, ya sea por intervención de terceros o por desgaste propio del uso, considerando además que su año de fabricación es 2020. Esta circunstancia fue confirmada tanto por la evidencia fotográfica incorporada al juicio, la cual permite apreciar con claridad que se trata de un automóvil en buen estado, como por los testimonios rendidos por los funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento. A ello se suma que el propio imputado, al prestar declaración, reconoció haber sido detenido mientras se encontraba en el interior del vehículo, en la intersección de calles El Payador y

Las Tórtolas, comuna de El Bosque. En este contexto, no cabe duda respecto de la plena operatividad y funcionalidad mecánica del vehículo al momento de los hechos.

Por último, **la tenencia o posesión por parte del acusado del automóvil** marca Changan, modelo CS15, color rojo, placa patente única LRHS57, el cual registraba encargo vigente por el delito de robo con violencia, se infiere de manera clara y precisa a partir de su ubicación física en el asiento del conductor al momento de ser sorprendido por funcionarios de Carabineros en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles El Payador con Las Tórtolas, comuna de El Bosque, conforme declararon en juicio el subteniente Leonardo Vega Inostroza y el cabo primero Claudio Bustos Aravena. Ambos funcionarios relataron- como se ha venido diciendo- que el vehículo se encontraba con las luces delanteras y traseras encendidas, condición que requería necesariamente del uso de la llave (la que no fue encontrada) o de otro mecanismo para activar el contacto la que no fue encontrada) u otra intervención en el mecanismo del vehículo lo que permite descartar una mera presencia pasiva o circunstancial del acusado. Asimismo, al interior del automóvil se halló una silla de ruedas de propiedad del imputado, lo que evidencia que mantenía pertenencias personales dentro del vehículo, reforzando así el vínculo material y efectivo con la especie sustraída, disponiendo un lugar específico para guardar objetos propios.

A lo anterior, se suma que ninguno de los ocupantes portaba documentación del automóvil ni licencia de conducir, y que el acceso al interior del móvil no presentaba signos de forzamiento, lo que en su conjunto permite tener por configurada una posesión consciente, efectiva y no meramente circunstancial por parte del acusado respecto del vehículo encargado por robo.

2.- Respecto a la Fase subjetiva, Dolo directo o eventual.

En el plano subjetivo, lo cierto es que los medios de cargo presentados por el Ministerio Público resultaron idóneos, precisos y contundentes para tener por acreditado el conocimiento del acusado respecto del origen ilícito del vehículo, o al menos que no podía menos que conocer tal circunstancia. Tratándose de un elemento que pertenece a la esfera interna del agente, su concurrencia debe ser necesariamente inferida a partir de antecedentes objetivos que rodearon tanto la detención del imputado como el estado en que se encontraba el vehículo motorizado, en cuyo interior fue sorprendido sentado en el asiento del conductor, es decir, en posición activa de control y dominio funcional sobre la especie.

En efecto, la prueba rendida en juicio permite afirmar que el acusado actuó, a lo menos, con dolo eventual, en tanto se representó la alta probabilidad de que el vehículo tenía un origen ilícito y aceptó ese riesgo- no resulta razonable ni ajustado a las pautas del comportamiento social habitual que una persona, sin vínculo alguno con un vehículo, proceda a ingresar a este en plena vía pública, con el solo pretexto de fumar o resguardarse del frío- manteniéndolo bajo su poder. Esta conclusión se sostiene en un cúmulo de antecedentes concordantes.

En primer lugar, el móvil fue encontrado con sus luces delanteras y traseras activas, excluyéndose la posibilidad de un ingreso fortuito o casual no obstante no haber sido encontrada la llave del automóvil, ya que es posible inferir de manera razonable, sobre la base de lo indicado por el testigo Vega Inostroza que el vehículo no tenía botón de encendido para su activación, que se utilizó

un mecanismo diverso para aquello, manteniendo por cierto tanto el acusado como su acompañante armas blancas del tipo cuchillo. En segundo término, el ocultamiento intencional de la placa patente mediante barro dispuesto, específicamente, sobre los dos últimos dígitos numéricos "57" que impedían su visualización inmediata, como se indicara, fue interpretado por los funcionarios como una práctica comúnmente utilizada para evitar controles policiales y dificultar la identificación de vehículos con encargo por robo, reforzando la conclusión de una conducta deliberada y consciente por parte del acusado.

A lo anterior se suma que el encartado, no portaba licencia de conducir ni documentación alguna que acreditara tenencia legítima del vehículo. Además, como se ha venido diciendo, en el interior del automóvil, específicamente en el maletero, se encontró una silla de ruedas de propiedad del imputado, lo que evidencia no sólo su permanencia dentro del vehículo, sino también la disposición material de sus pertenencias en él, reforzando el vínculo personal con la especie.

En consecuencia, valorados de forma conjunta todos estos antecedentes objetivos y su razonable apreciación conforme a la lógica y la experiencia, es posible concluir que el acusado debió representarse la ilicitud del origen del vehículo y, pese a ello, decidió mantenerlo en su poder, permaneciendo en el interior del mismo al momento de la fiscalización policial, configurándose así de manera suficiente el elemento subjetivo del tipo penal de receptación, en los términos del artículo 456 bis A del Código Penal, al menos bajo la forma de dolo eventual.

En esta misma línea argumentativa, no podemos olvidar que el acusado arguye que sólo se enteró del origen ilícito del vehículo en el momento de ser fiscalizado por el personal de Carabineros, afirmaciones que estos jurisdicentes no pueden dar por cierta considerando los antecedentes que nos entrega la prueba de cargo – en los términos ya analizada- la que unida a ribetes que entrega el propio acusado en su declaración, no hacen más que confirmar el elemento subjetivo del tipo penal, en términos tales que, conocía o no podía menos que conocer el origen ilícito del automóvil marca Changan, placa patente LRHS57 color rojo.

Adicionalmente, no puede soslayarse que la versión entregada por el acusado en cuanto a que habría ingresado al vehículo únicamente para fumar un cigarrillo de marihuana o resguardarse del frío, resulta inverosímil y ajena al comportamiento socialmente aceptado. Desde una perspectiva jurídica, no es razonable ni conforme a la experiencia común que una persona que no tiene ningún vínculo con un vehículo motorizado - sin ser su propietario, tenedor legítimo ni acompañante autorizado- proceda a ingresar a este en plena vía pública, por la sola circunstancia de querer fumar o protegerse del clima. Tal conducta se aleja de las pautas normales de convivencia y respeto por la propiedad ajena, y más bien revela una disposición consciente al riesgo, lo que, valorado en el contexto del resto de la prueba rendida, permite descartar una explicación inocente y sostener que el acusado se representó la alta probabilidad de que el vehículo era producto de un ilícito, aceptando tal eventualidad, con lo que el conocimiento, al menos potencial de aquello, resulta en este caso demostrado, satisfaciéndose el elemento subjetivo requerido por la norma.

Pues bien, el análisis de la prueba rendida en el presente caso se ajusta plenamente al principio de razón suficiente y al principio de corroboración, garantizando así los estándares de nuestro procedimiento penal. En efecto, cada elemento probatorio ha sido valorado en conjunto y de manera

razonada, verificando su coherencia interna y su correspondencia con el resto de los antecedentes incorporados al juicio. De esta manera, se asegura que las conclusiones alcanzadas se fundamentan en una apreciación objetiva y lógica, cumpliendo con los principios de justicia y debido proceso que rigen nuestro ordenamiento jurídico.

DÉCIMO: Participación. Que en lo que compete a este rubro, es dable señalar que, tal como se explicó al tratar tanto el plano objetivo como subjetivo del ilícito de receptación, no puede soslayarse que:

- 1.- Los funcionarios de Carabineros que procedieron a la detención del imputado, subteniente Leonardo Vega Inostroza y cabo primero Claudio Bustos Aravena, fueron informados al recibir el turno que conforme a comunicado de la central de comunicaciones CENCO en la intersección de calle Las Tórtolas con El Payador se encontraba un vehículo con encargo vigente;
- 2.- Al llegar al lugar, constataron la presencia del vehículo con dos ocupantes en su interior, siendo el acusado quien se encontraba sentado en el asiento del conductor, y su acompañante en el asiento del copiloto;
- 3.- El automóvil mantenía encendidas sus luces delanteras y traseras, lo que fue constatado por los funcionarios aprehensores al momento de la fiscalización;
- 4.- Las placas patentes del vehículo, tanto delantera como trasera, se encontraban cubiertas con barro, ocultando los dígitos numéricos finales (57), lo que impedía su identificación visual;
- 6.- Luego de limpiar los dígitos numéricos de la placa patente delantera, los funcionarios consultaron la sigla alfanumérica, corroborando el encargo vigente por robo del automóvil de fecha 10 de junio de 2024;
- 7.- Harold Alexander Muñoz Tapia fue detenido en circunstancias en que se encontraba en el interior del vehículo marca Changan, placa patente única LRHS57, el cual había sido sustraído cinco días antes y mantenía encargo vigente por robo con violencia.
- 8.- Que, pese a que el acusado manifestó tener dificultades de movilidad producto de lesiones anteriores en sus extremidades inferiores -afirmando que utilizaba una silla de ruedas que fue hallada en el maletero del vehículo-, se encontraba en condiciones de ponerse de pie y desplazarse con dificultad, tal como lo constataron los funcionarios al solicitarle que descendiera del automóvil, lo que refuerza su capacidad para ocupar activamente el asiento del conductor;
- 9.- Que, además, durante el registro corporal practicado por personal policial, se encontró en poder del imputado un cuchillo de 19 cm de largo total, con una empuñadura de 7,5 cm y una hoja de 11,5 cm, correspondiente al NUE 7175329, mientras que su acompañante portaba un arma blanca de mayores dimensiones.

Así las cosas, resulta evidente que el conjunto de antecedentes conocidos durante el juicio contribuye a configurar un escenario de flagrancia indesmentible, en el que intervino activamente el encausado, por cuanto fue observado por los funcionarios aprehensores al interior del vehículo sustraído, ocupando el asiento del conductor, lo que sugiere, al menos, la tenencia material del bien mueble objeto del delito, incompatible con una mera tenencia pasiva.

Por lo demás, el acusado -al alero de su tesis exculpatoria- reconoció haber sido sorprendido por Carabineros de Chile al interior del automóvil, señalando que se encontraba en el asiento del

piloto junto a su tío, cobijándose momentáneamente del frío, pese a que se hallaban a escasa distancia de su domicilio, lo que resta credibilidad a su versión y refuerza su vinculación directa con la especie sustraída.

El conjunto de motivos expuestos con antelación permite tener por afianzada la autoría directa e inmediata que cupo a Harold Muñoz Tapia en los términos previstos en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

UNDÉCIMO: Alegaciones de la defensa y declaración del imputado. Sin perjuicio de lo ya razonado en relación con la configuración del delito de receptación y participación, corresponde abordar las principales alegaciones formuladas por la defensa en su alegato de clausura.

En primer lugar, la defensa se sostiene que no se ha acreditado la concurrencia del elemento objetivo del tipo penal, argumentando que la permanencia del acusado al interior del vehículo habría sido breve y circunstancial, por lo que no existiría una tenencia idónea para generar un aprovechamiento posterior. Sin embargo, esta afirmación **resulta contradicha con los hechos debidamente establecidos en juicio**, los cuales dan cuenta de que el acusado fue sorprendido en el interior del vehículo encargado por robo, ubicado específicamente en el asiento del conductor, con las luces delanteras y traseras activas, a lo que se debe sumar que el acusado mantenía en el interior del automóvil una silla de ruedas de su propiedad, lo que evidencia que no solo se encontraba dentro del vehículo, sino que había introducido pertenencias personales en él, lo cual es incompatible con una permanencia breve o espontánea, o un contacto accidental o casual. Por lo demás, la jurisprudencia no exige una duración determinada para configurar la tenencia del bien, sino la existencia de un dominio fáctico y consciente, lo que en el presente caso ha quedado debidamente acreditado.

En segundo término, la defensa ha cuestionado el dolo del acusado y la existencia de antecedentes que permitan sostener que conocía - o no podía menos que conocer- el origen ilícito del vehículo. A este respecto, cabe reiterar una vez más que el ocultamiento deliberado de los dígitos numéricos finales de las placas patentes con barro, tanto en la parte delantera como trasera del vehículo, constituye una conducta reveladora de conciencia de ilicitud, especialmente cuando dicha alteración afecta precisamente los elementos identificatorios del automóvil encargado. Si bien la defensa del acusado intentó justificar dicha condición como producto de la suciedad propia del invierno, lo cierto es que la disposición del barro era selectiva y específica, lo que fue advertido por los funcionarios policiales, quienes reconocieron que se trataba de una técnica comúnmente utilizada para evitar el reconocimiento de vehículos robados.

Asimismo, el acusado no portaba licencia de conducir ni documentación alguna que justificara la tenencia del automóvil, y, al momento de su fiscalización, se le encontró en el cinto un cuchillo de 19 centímetros, lo que refuerza un contexto incompatible con una presencia inocente en el vehículo y en el lugar, como también indicaría de un hecho ilícito.

Respecto a la alegación vinculada a la supuesta falta de congruencia de la acusación, se advierte que dicha objeción carece de asidero. La acusación fue clara en señalar los hechos constitutivos del delito, precisando el lugar, la fecha, la descripción del vehículo y la conducta atribuida al acusado. Que no se hayan desarrollado en extenso todos los indicios que permiten inferir

el conocimiento del origen ilícito, no impide que estos puedan surgir válidamente a través de la prueba rendida en juicio, conforme lo autoriza el principio de libertad probatoria, como tampoco aquello que dice relación los verbos rectores del tipo penal. En consecuencia, no se advierte infracción alguna al principio de congruencia formal ni sustancial.

Finalmente, la defensa plantea la inexistencia de antijuridicidad material, sosteniendo que el acusado no habría incrementado el perjuicio causado por el delito base. Tal argumento no puede prosperar, pues el bien jurídico protegido por la norma de receptación es la tutela del tráfico patrimonial seguro - llamado también circulación de bienes-, lo que se ve afectado por el solo hecho de mantener en poder una especie producto de un delito, sin que sea necesario generar un daño adicional al ya causado por el hecho base. El mero mantenimiento de la especie sustraída, impidiendo su recuperación o facilitando su ocultamiento, constituye una afectación al bien jurídico que justifica la reprochabilidad penal de la conducta.

Por lo tanto, todas las alegaciones formuladas por la defensa han sido debidamente rebatidas con el mérito de la prueba rendida en juicio, manteniéndose incólume la tesis acusatoria y quedando acreditada tanto la tipicidad objetiva como subjetiva, la antijuridicidad de la conducta y la participación del acusado en calidad de autor del delito de receptación de vehículo motorizado.

En cuanto a la declaración del acusado, reproducida en el considerando cuarto, cabe señalar que sus dichos carecen de verosimilitud y no logran desvirtuar el conjunto de antecedentes objetivos establecidos en juicio. Tal como se ha razonado a lo largo de esta sentencia, su versión aparece claramente acomodaticia, construida sobre la base de una condición médica que, según afirmó, lo habría llevado a ingresar al vehículo únicamente con el propósito de cobijarse del frío, le dolían las piernas. Sin embargo, dicha explicación resulta contradictoria y carente de lógica interna, toda vez que -en una primera versión- el acusado indicó que su tío empezó a intrusar el auto, que estaba abierto, ingresan al automóvil para fumar un cigarrillo de marihuana, pero luego señaló que, al momento de abordar el vehículo, ya lo habían consumido, lo que suscita legítimamente la interrogante sobre el verdadero motivo por el cual permanecía al interior del automóvil y que se logra responder conforme el análisis efectuado a lo largo del desarrollo de los acápites que anteceden.

A ello se suma que, pese a manifestar tener limitaciones físicas en ambas extremidades inferiores, lo cierto es que se encontraba en condiciones de ponerse de pie y descender del vehículo por sus propios medios, según lo constataron los funcionarios policiales al momento de la fiscalización. Asimismo, el hecho de que se encontrara en el asiento del conductor, con el vehículo encendido y una silla de ruedas de su propiedad en el maletero, refuerza el vínculo material con la especie sustraída y contradice su intento de presentarse como un sujeto ajeno a los hechos.

En consecuencia, el tribunal desestima la declaración del acusado por estimarla inverosímil, contradictoria e insuficiente para generar una duda razonable sobre su participación en el delito que se le atribuyó.

DUODÉCIMO: Que en virtud de lo que dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal, se abrió debate respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y todo lo relativo a la determinación y cumplimiento de la pena. El Ministerio Público, incorporó extracto de filiación y antecedentes del encartado, en el cual registra una anotación prontuarial

pretérita con la finalidad de establecer que no goza de irreprochable conducta anterior. Además, de tener que cumplir la pena a imponer de manera efectiva por no reunirse en la especie los requisitos que establece la ley 18.216 para la concesión de una pena sustitutiva. Destaca la condena impuesta al encartado en la causa RIT 1.251/2023, RUC 2300269331-3 del Undécimo juzgado de garantía de Santiago con fecha 26 de febrero de 2024, condenado como autor del delito consumado del artículo 9 de la ley 17.798 a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, Pena sustitutiva: libertad vigilada intensiva.

Asimismo, el persecutor se opone al reconocimiento de la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos solicitada por la defensa, por estimar que la declaración prestada por el acusado en el juicio en nada contribuyó, enarbolando junto a su defensa una teoría alternativa que no pudo ser acreditada.

Reiteró la solicitud de penas, consignadas en el auto de apertura, reproducidas en el considerando segundo de esta sentencia.

A su turno, la defensa del acusado solicitó el reconocimiento de la atenuante establecida en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, considera que el testimonio de su representado fue fundamental para acreditar los hechos, dio cuenta de circunstancias que no habrían podido ser conocidas de otra manera, reconoció que se subió al automóvil, que encendió las luces, que la silla de ruedas era de su propiedad y que la subió al maletero.

Pide que su representado sea condenado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, y se le exima del pago de las costas de la causa por haber sido representado por la defensoría penal pública.

En cuanto a la multa que lleva aparejado el delito de receptación de vehículo motorizado nada solicitó. Respecto a la forma de cumplimiento, conociendo los antecedentes de su representado, corresponde cumplimiento efectivo.

DÉCIMO TERCERO: Atenuantes. Que en cuanto a la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, el Tribunal no dará lugar a esta, por estimar que el testimonio del acusado Muñoz Tapia no emergió como un antecedente de corroboración al establecimiento del delito y de su participación punible. Bajo esa dimensión, evidentemente que lo expuesto por el encartado (en esta sede jurisdiccional) no generó un efecto de simplificar la comprensión de lo sucedido, tal como se indicó en los acápites que anteceden, dejando en claro que optó por elevar una coartada o tesis paralela a los hechos (todo ello sin soslayar claramente la hipótesis de flagrancia en que fue aprehendido), aquella solo tuvo por finalidad aminorar su responsabilidad en los hechos, tal como se ha indicado en los acápites que antecede. Es por lo anterior, que el Tribunal no vislumbra una real utilidad derivada de los dichos del imputado que permitan fortalecer o reforzar la prueba de cargo allegada a estrado, en especial, aquella que dice relación con la faz subjetiva del tipo penal.

DÉCIMO CUARTO: Determinación de pena. Que el delito de **receptación de vehículo motorizado** a la fecha de comisión de los hechos se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo (conforme modificación introducida por la ley 21.170 de fecha 26 de julio de 2019). Pues bien, teniendo presente

que no concurren circunstancias atenuantes que considerar, el Tribunal, atento a lo dispuesto en el N° 1 del artículo 449 del Código Penal, aplicable al caso, aplicará la pena en su mínima expresión tal como se indicará en la parte resolutive de la sentencia.

En cuanto a la pena de multa aparejada al delito, el Ministerio Público esta se fijará conforme el avalúo de la tasación fiscal del vehículo marca Changan, modelo CS15 año 2020, esto es, 4.896.897 pesos incorporado por el persecutor en la etapa probatoria.

Teniendo en consideración el cumplimiento de responsabilidades económicas por parte del acusado, se otorgará al sentenciado parcialidades para su pago en los términos que indicará en la parte resolutive de la sentencia, todo ello de acuerdo con lo que faculta el artículo 70 del Código Penal.

En cuanto a abonos que considerar, en el auto de apertura se consigna como información al respecto en el considerando séptimo, que el acusado se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva de manera ininterrumpida desde el 16 de junio de 2024, a lo que se le debe sumar el día de la detención, contabilizándose a la fecha de esta sentencia un total de **395 días de abonos**.

DÉCIMO QUINTO: Forma de cumplimiento. No reuniéndose en la especie los requisitos establecidos para la concurrencia de una pena sustitutiva conforme a la Ley N° 18.216, y atendidos los antecedentes allegados por el persecutor, la pena a imponer deberá ser cumplida de manera efectiva. En este sentido, las circunstancias del caso, los elementos probatorios presentados no permiten la aplicación de una medida alternativa, siendo necesario asegurar el cumplimiento íntegro de la sanción como una forma de dar respuesta proporcional al hecho delictivo y garantizar los fines preventivos y retributivos del sistema penal.

DÉCIMO SEXTO: Costas. Que no se condenará en costas al encausado por haber sido patrocinado por la Defensoría Penal Pública y, en ese supuesto, el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales posibilita liberar al sentenciado de solventar dicha carga procesal.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14 N°1, 15 N°1, 24, 26, 29, 49, 50, 70, 449 y 456 bis A del Código Penal; 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, y ley 18.216 modificada por la ley 20.603, **se declara que:**

I.- Se condena a **HAROLD ALEXANDER MUÑOZ TAPIA**, cédula de identidad N° 21.313.167, ya individualizado, a cumplir la pena de **CUATRO AÑOS de presidio menor en su grado máximo, a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena**, como autor del delito **consumado** de receptación de vehículo motorizado, perpetrado el día 15 de junio de 2024, en la comuna de El Bosque.

II.- Que la pena corporal impuesta al sentenciado **deberá cumplirla efectivamente**, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad con ocasión de esta causa. Conforme lo indicado en el considerando décimo cuarto, se reconoce un **total 395 días de abonos** a la fecha, sin perjuicio de otros que se obtengan, que deberán ser calculados por el tribunal de ejecución.

III.- Se condena además Harold Muñoz Tapia al pago de una multa de cuatro millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos noventa y siete pesos (4. 896.897) correspondientes al avalúo de la tasación fiscal del vehículo motorizado receptado.

Que para el pago de la pena de multa se autorizan diez (10) parcialidades, iguales y sucesivas, las que deberá enterar dentro de los primeros cinco días de cada mes, a contar del mes subsiguiente a aquel en que quede ejecutoriada la presente sentencia. El no pago de una sola de las cuotas hará exigible el total de la multa impuesta.

Que en el evento que el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa que le ha sido impuesta podrá imponérsele vía de sustitución y apremio la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, siempre que se cuente con su acuerdo. En caso contrario, por vía de sustitución y apremio, se le impondrá la de reclusión regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de seis meses, lo que deberá ser resuelto en el Tribunal de ejecución.

IV.- No se condena en costas al sentenciado.

V.- Dese estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, modificada por la Ley 20.568 de 31 de Enero de 2012, una vez que quede firme el presente fallo.

Oficiese a los organismos que corresponda comunicando lo resuelto y remítase copia de esta sentencia al Tribunal de Garantía de esta ciudad para su cumplimiento.

Redactada por la Magistrada Pamela Silva Gaete

Regístrese, anótese y en su oportunidad archívese.

RUC : N°2400688630-9

RIT : N° 121-2025

Dictada por los Jueces de la Sala del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, integrada por la Magistradas Doña Virginia Rivera Álvarez, quien presidió, Doña Pamela Silva Gaete como Redactora y el Magistrado Don Washington Jaña Tapia.